

Violencia escolar

La violencia en los colegios dejó hace tiempo de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación estructural. Los recientes anuncios del Gobierno sobre proyectos de «tramitación rápida» buscan responder a una demanda urgente de las comunidades educativas: seguridad.

La posibilidad de implementar revisiones de mochilas y controles preventivos refleja un cambio de enfoque, donde la prioridad ya no es solo formativa, sino también de resguardo inmediato frente a situaciones que, hasta hace poco, parecían impensadas dentro de una sala de clases.

Actuar con urgencia es comprensible cuando hay riesgos evidentes, pero también implica el desafío de no caer en soluciones apresuradas que puedan afectar derechos o generar medidas poco efectivas en el largo plazo. La revisión de mochilas, por ejemplo, puede ser vista como una herramienta preventiva, pero también plantea interrogantes sobre privacidad,

estigmatización y el clima de confianza al interior de las comunidades escolares.

El aumento de episodios de violencia, incluso con presencia de armas, obliga a tomar decisiones concretas. La seguridad no puede esperar, pero garantizar espacios protegidos no se logra únicamente con controles, sino también abordando las causas de fondo: convivencia escolar deteriorada, problemas de salud mental, entornos sociales complejos y una institucionalidad educativa que muchas veces reacciona tarde.

La verdadera solución, entonces, no pasa solo por leyes más rápidas, sino por políticas más profundas y sostenidas en el tiempo. Si bien estas iniciativas pueden ser un primer paso para contener la crisis, el desafío es construir escuelas donde la seguridad no dependa de medidas excepcionales, sino de una cultura educativa basada en el respeto, la prevención y el acompañamiento. De lo contrario, el riesgo es tratar los síntomas sin sanar realmente la enfermedad.